CARAVANA DEL SUR EN OAXACA

Síntesis de las Mesas de Trabajo

Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia en Oaxaca,

Mesa 1. **Pueblos Indígenas en Resistencia**
Mesa 2. **Mujeres y Violencia de Género**
Mesa 3. **Víctimas de la Represión**
Mesa 4. **Agravios a Periodistas**
Mesa 5. **Agresiones Económicas, Políticas y Culturales**

Mesa 1. Pueblos Indígenas en Resistencia

Las comunidades y pueblos indígenas, ancestralmente hemos sido los principales cuidadores de los recursos naturales, producto de la cosmovisión que tienen en su relación con la madre tierra, desarrollando sus propias formas organizativas y recuperando lo que sus antecesores les han legado.

Las experiencias vertidas por las comunidades y organizaciones indígenas y sociales expresadas provenientes del Estado de Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Durango y Puebla en esta Mesa, encontramos en común:

Las comunidades indígenas seguimos siendo víctimas del despojo, la exclusión y marginación que las políticas gubernamentales han instrumentado desde hace años. Este despojo se ha ido "modernizando", como en tiempos de la Conquista, traducida en la utilización de la invasión de lugares sagrados, la construcción de zonas habitacionales, despojando de tierras a los pueblos, la incorporación del maíz transgénico que agrede a las especies nativas, la extracción de los recursos minerales, la explotación de los mantos acuíferos, para convertirlos en presas hidroeléctricas o mini hidroeléctricas, con el fin de generar energía eléctrica, la falta de solución a los conflictos agrarios; este modelo de desarrollo está al servicio de los grandes capitales privados y extranjeros, contando con el beneplácito de los diversos niveles de gobierno, estatal y federales en las diversas regiones del país.

Todas estas acciones desgarran el tejido social de los pueblos y comunidades indígenas, así como a desmembrar a las propias autoridades tradicionales.

Ante el rechazo y organización de los pueblos a todas estas estrategias, la respuesta gubernamental ha sido fundamentalmente la represión vía encarcelamiento, los asesinatos de población y de dirigentes sociales, la fabricación de delitos del orden penal incluido la acusación de estar ligados al crimen organizado, la criminalización de la protesta social, así como el condicionamiento de los programas sociales, el alza en las tarifas eléctricas, el desabasto del agua, la burocratización excesiva para obtener los servicios básicos, lo que ha representado actos de violencia inusitada y de falta de procuración de justicia. Desafortunadamente a la par, los poderes fácticos, vía las estructuras caciquiles o los grupos paramilitares, han sacrificado la vida de muchos hermanos y hermanas. Peor aún: esta violencia institucionalizada del estado mexicano, violenta a la propia Constitución Política de México e incluso a los Convenios y Tratados Internacionales firmados por el propio gobierno mexicano.

Son múltiples las experiencias vividas por comunidades y pueblos como las de la Sierra Norte de Oaxaca, el pueblo wirarika de Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, las comunidades triquis, las comunidades zapotecas de valles centrales, los pueblos originarios de Tlalpan, las comunidades de la mixteca, chatinas y de la Costa y Sierra Sur, así como las afectadas en Chihuahua, los nahuas de Puebla, por mencionar algunos, que seguimos viviendo esta violencia, producto de la defensa de sus recursos naturales, así como nuestro derecho a la autonomía a decidir sobre el uso y manejo de sus recursos naturales, el derecho a ser consultados y su rechazo por lo que implica de despojo de miles de habitantes y la imposibilidad de tener medios de subsistencia y de poder aspirar a condiciones de una vida digna. Aunado a ello, se instrumenta una política gubernamental que no reconoce nuestros derechos como pueblos indígenas y el modelo educativo hegemónico, más bien intenta desconocer la identidad de los pueblos indígenas, sus formas de organización y su propio idioma.

También reconocemos que las leyes existentes, han supuesto un retroceso para el ejercicio y respeto de los derechos de los pueblos indios y más bien han sido utilizadas para defender los intereses de los grandes capitales.

Las participantes y los participantes en esta Mesa, afirmamos que este enriquecimiento ilegal, representa una imposición, incluida la creciente militarización, la complicidad gubernamental con la delincuencia o incluso organizada con el gobierno.

Una interrogante también expresada en la Mesa, por parte de aquellos que no provienen de los pueblos indígenas, es ¿Cómo conectarse los pueblos que no son indígenas con la raíz, espiritualidad y resistencia de los pueblos indígenas y cómo se articulan nuestras luchas? Es necesario encontrar las formas para defender y cuidar lo que es de la nación, del ser humano y lo que es el ser humano.

Propuestas:

Se generen acciones de apoyo a las diferentes luchas en defensa de los territorios, así como un llamado a la participación y organización.

Nos reconocemos como custodios de las culturas ancestrales que nuestros pueblos originarios, nos han legado, lo que significa también respetar las tradiciones, el trabajo comunal y la seguridad comunitaria.

Ser vigilantes de los programas gubernamentales a fin de no permitir que éstos sean los que ayuden al despojo de las comunidades y más bien la comunidad sea productor de sus propios bienes.

Desde la educación reforzar el respeto a la vida comunal, desarrollar un nido de lenguas, que supone el rescate de las lenguas que se han ido perdiendo.

Se propone que los pueblos y comunidades indígenas se integren al Movimiento por la Paz y la Justicia, encontrando las formas de fortalecer nuestros consensos y discutir los disensos, en el ánimo de seguir construyendo este Movimiento.

Se propone que las Caravanas que impulse el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, se promuevan espacios de diálogo y asambleas en relación a la problemática indígena, para que en conjunto vaya habiendo plena consciencia y participación de lo que éste significa.

Reivindicamos los Acuerdos de San Andrés Sacamchem de los Pobres como Ley Suprema en nuestros pueblos, naciones y tribus y seguimos exigiendo que sea desmantelada la estructura de leyes y normas neoliberales producto de la contrareforma indígena del año 2001, a fin de que dichos acuerdos sean elevados a rango constitucional.

Mesa 2. Mujeres y Violencia de Género

Documento de análisis para la discusión en la mesa:

Caravana al SUR por la Paz con la Justicia y Dignidad
Mujeres

En la planeación de la llegada de la Caravana al SUR, se consideró incluir el tema de las mujeres, en el programa temático del evento porque la violencia que viven las mujeres en Oaxaca es alarmante. Es por ello que queremos visibilizar y reflexionar en este momento.

Oaxaca se caracteriza entre otras cosas por ser uno de los estados con mayor índice de violencia hacia las mujeres en la década reciente, y en las estadísticas nacionales se encuentra en los primeros cinco lugares en diversos tipos de violencia: asesinatos, violencia intrafamiliar o violencia sexual.

Durante el sexenio del gobierno de Ulises Ruíz Ortíz, 276 mujeres fueron asesinadas, cerca de 46 mujeres cada año. En lo que va de este año, de enero hasta la fecha ocurrieron 50 asesinatos de mujeres, o sea en 8 meses ya son más que el promedio anual de los años anteriores. La conclusión es que hasta ahora, y bajo el nuevo gobierno de alternancia, no ha habido respuestas contundentes ni recursos para la prevención y erradicación del fenómeno.

En violencia intrafamiliar Oaxaca ocupa el primer lugar en las estadisticas nacionales. Una encuesta realizada por INEGI en el 2006 muestra el panorama:

- El 46.0 por ciento de las mujeres oaxaqueñas casadas o unidas han sido objetos de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación.

- Más de una cuarta parte (28.4%), ha padecido violencia extrema por parte de su pareja, de ellas:
    - 40.4 por ciento de ellas han requerido de atención médica para superar los daños ocasionados por las agresiones.
    - 26.0 por ciento son mujeres cuya pareja ha usado su fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales.

- Sólo una de cada diez mujeres deciden denunciar a su agresor, mientras que la gran mayoría no acude ante ninguna autoridad por miedo, porque no sabían que pueden denunciar, por vergüenza o por falta de confianza en las autoridades.

Por el porcentaje alto de violencia intrafamiliar, que rebase el 15% requerido para considerarlo como problema de salud pública, consideramos que no puede ser reducido al ámbito privado, como quiere tratarlo la sociedad y las autoridades.

El movimiento feminista en Oaxaca habla de feminicidio cuando se refiere a la violencia de género, tomando la definición de Marcela Lagarde que no se reduce a homicidios de mujeres, sino a todo tipo de violencia de género, responsabilizando en primera linea al Estado por ello.

Analizando el porque del feminicidio en Oaxaca, ubicamos una corresponsabilidad entre una sociedad que tolera la violencia de género y un gobierno e instancias que no actuan de manera adecuada para erradicarla.

La tolerancia de la sociedad ante la violencia se muestra por ejemplo en que una mujer asesinada, antes de su muerte, ha ido en promedio con siete diferentes personas para pedir ayuda: con su madre, el hermano, el cura, una maestra y no se hizo nada para ayudarla.

Las instancias de gobierno que deberían atender la problemática, ejercen violencia institucional por la omisión y negligencia de su responsabilidad de brindar seguridad a las mujeres y garantizar una vida sin violencia.

La atención, erradicación y sanción a la violencia carecen de un programa acorde a la gravedad del problema y las dependencias no están coordinadas para enfrentarlo. Lo que agrava la situación es el hecho que los pocos servicios existentes carecen de un presupuesto suficiente, de instalaciones adecuadas y de personal capacitado para dar una atención de calidad y calidez.

La impunidad que existe en el Estado, como en todo México, toca a las mujeres aún más fuerte en combinación con el machismo que rige en las dependencias de la procuración de justicia y que hace que los funcionarios se posicionan al lado del agresor y que deja las mujeres en una situación de injusticia. El poder judicial carece de personal capacitado y sensibilizado en género y prevención de la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto muchas de las mujeres maltratadas optan por no denunciar por la

falta de confianza y por los maltratos que reciben por parte de los servidores públicos de la justicia.

El poder legislativo no muestra interés en la grave situación. Hasta la fecha no ha presentado a la sociedad cuales son sus compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres, ni siquiera han discutido cual será su agenda en la materia. Por el contrario; como asesores de diputados y diputadas tienen a personas que han sido denunciados en los medios de comunicación como golpeadores de mujeres.

Otra muestra de violencia estructural que queremos destacar es la falta de posibilidades de las mujeres en la participación política, que sigue siendo marginal y deficiente. Sumando a razones culturales y sociales, las instituciones electorales, los mecanismos de elección y las leyes no garantizan la igualdad en la representación en los cargos.

Es otra evidencia que las instituciones gubernamentales y los órganos electorales no favorecen, sino que obstaculizan el avance hacia la igualdad en la participación política. Al largo del tiempo varias de las pocas mujeres electas fueron destituidas por razones de género. En este año 2011 tenemos conocimiento de diversos casos de discriminación sistemática hacia las mujeres que contendieron u ocupan un cargo municipal. En algunos casos son víctimas de conflictos politicos y entre partidos de una comunidad.

Gracias a la presión de colectivos y organizaciones feministas, como de mujeres y hombres sensibilizadas, se han dado algunos primeros pasos para atender a la grave situación:

- Se elevó la Fiscalía para delitos contra las mujeres al nivel Subprocuraduría y las oficinas fueron trasladadas al centro de la ciudad para ser más accesibles a las mujeres que vienen a denunciar.

- Se empezó a discutir la tipificación del feminicidio en el codigo penal del Estado y considerando la violencia intrafamiliar como delito grave.

A pesar de estos avances, la respuesta es insuficiente ante las necesidades reales de las mujeres. Faltan muchos pasos para erradicar la violencia que sufren las mujeres en Oaxaca. Nosotras estamos pendientes al asunto y dispuestas de seguir presionando que el gobierno cumple con su responsabilidad pero también seguir con nuestras diversas actividades que realizamos día a día a favor de los derechos de las mujeres. Convocamos a que este espacio sea de reflexión, de construcción de propuestas, pero también un espacio de denunciar a través de su testimonio la falta de voluntad de erradicar la violencia en todos sus niveles y formas, hacia nosotras.

Documento síntesis:

REUNIDAS EN LA MESA DE TRABAJO: MUJERES Y VIOLENCIA DE GÉNERO.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 12 de septiembre del 2011.

Nos escuchamos, lloramos, nos indigno la alarmante situación de violencia contra las mujeres.
El coraje, la pena y el dolor, nos alienta en la lucha que estamos dando, frente a la impunidad, en estas pocas horas escuchamos y compartimos la palabra de al menos 30 mujeres entre esposas, madres, hijas, hermanas, abuelas, trabajadoras, estudiantes, indígenas, activistas, defensoras y luchadoras, cuyos testimonios dieron cuenta de la cruda realidad que se hace invisible, muestra de ella son:

IMPUNIDAD.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
VIOLENCIA FAMILIAR
FEMINICIDIOS
VIOLACION DE MENORES
ARREBATO DE LAS Y LOS MENORES POR LOS PADRES COMO UNA FORMA DE CASTIGO A LAS MADRES
ACOSO SEXUAL
ASESINATO DE DEFENSORAS Y COMUNICADORAS
DESAPARICIONES FORZADAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
PERSECUSIÓN DE LAS MUJERES POR SUS AGRESORES PARA DESISTIRSE DE LAS DENUNCIAS CONTRA ELLOS.
INTIMIDACION, AMENAZAS Y PERSECUSION POR LOS FUNCIONARIOS QUE SE COLUDEN CON LOS AGRESORES
Y FRENTE A TODO ESTO, NULA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE A ESTA PROBLEMÁTICA.

Oaxaca, se circunscribe a un clima de violencia de violencia que vive el Pais, y la violencia contra las mujeres forma parte, no es un ente aparte, no es un problema únicamente de las mujeres.

Hoy queremos que esta caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, levante la voz y no repita la violencia contra las mujeres invisibilizandola.

Consideramos que tenemos derecho a denunciar y que no se nos etiquete como locas, putas, mentirosas, que nos manipulan y que tenemos tintes políticos cuando lo hacemos.

Porque hoy, en Oaxaca donde la impunidad campea, parece que el destino de las mujeres que nos revelamos contra la violencia es **Cárcel o muerte, y entonces preguntamos: Dónde está una vida de Paz con la Justicia y Dignidad para las mujeres.**

Es momento de que se pronuncien por esta grave problemática invisibilizada y silenciada que quebranta y destruye el tejido social.

Reconocemos y agradecemos a las mujeres valientes que compartieron sus testimonios, quienes día con día luchan por tener una vida digna libre de violencia, desafiando un régimen de impunidad al desnudarlo y ponerlo en la palestra pública.

Hoy estamos convencidas y afirmamos que:

Tan graves la tortura de los grupos criminales y del estado como también la tortura que viven las esposas victimas de sus maridos.

Que no podemos hablar de presos políticos sin hablar de las presas sin visibilizar a las mujeres que están presas no solo por cuestiones políticas sino como consecuencia de la discriminación.

Es igual de grave la violencia de un marido hacia su esposa como la violencia del estado hacia el movimiento social.

Nosotras históricamente hemos estado hombro con hombro con los compañeros cuando son presos políticos o cuando los persigue el estado, pero dónde están ellos?, cuando nosotras denunciamos tortura, privación de libertad o los asesinatos contra mujeres a manos de sus parejas.

Llamamos a la caravana y a la Sociedad, para que abracemos estás luchas, porque nosotras no estamos sufriendo y llorando nada más, ESTAMOS LUCHANDO, les convocamos a que juntas y juntos cambiemos esta realidad, desde el hogar, la escuela, nuestra organización, nuestra comunidad.

Es necesario promover una cultura de igualdad, de respeto y de No violencia, de congruencia de nuestra vida pública con nuestra vida "privada".

PEDIMOS QUE ESTA CARAVANA RETOME COMO PARTE DE SUS DEMANDAS:

Exigir el feminicidio como Delito de lesa humanidad
Exigir cárcel a los Pederastas de San Felipe
Exigir cadena perpetúa al asesino y violador de pequeño Gamaliel.
Exigir Libertad Inmediata a Nelcy Regalado Benítez.
Cárcel a los responsables de los feminicidios.
Cárcel y despidos a los violadores y acosadores sexuales que se aprovechan de su estatus laboral y de poder.
Castigo a los violadores de niñas y mujeres indígenas.
Castigo a los responsables de la tortura, detención arbitraria contra mujeres en el marco de la cruenta represión del 25 de Noviembre del 2006.
Garantías para que Evitelia Pacheco Ramírez regrese a hacer su vida normal a su comunidad.
Presentación con Vida de las indígenas Triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez.
Esclarecimiento de los Asesinatos de Bety Cariño, Teresa y Felicitas.

¡La lucha contra violencia hacia las Mujeres es la lucha de todas y todos, hoy es un irrenunciable de un movimiento congruente que busca la Paz con Justicia y Dignidad!

Atentamente

Las mujeres

Mesa 3. Víctimas de la Represión

Revisamos en esta mesa más de 22 casos en 4 bloques, en los testimonios de Oaxaca encontramos un predominio de la represión política de grupos opuestos a los poderes establecido, pero no solo, nos acercamos peligrosamente a la dinámica nacional.

Las constantes encontradas entre los testimonios de Oaxaca y la Caravana son:

La exigencia de justicia desde diferentes sectores, tiempos y latitudes, encuentran como constante la negativa de las autoridades para investigar los casos, han respondido con indiferencia, burocracia e impunidad. Vemos que se criminaliza a las víctimas para fortalecer la política del miedo.

La criminalización de la protesta social tiene muchas caras. Las detenciones arbitrarias y la tortura metódica (y sistemática en varios casos) de activistas sociales y líderes sociales; en 2006 más de 140 personas recibieron un trato de prisioneros de guerra por parte de la PFP, fueron violentados sus derechos humanos, los cuerpos policiacos amenazaron, golpearon y fabricaron delitos. Todo ello contribuye a la falta de confianza en las instituciones y las autoridades. A otros más les ha reclasificado delitos para mantenerlos en prisión, ha intimidado a familiares para buscar silenciarlos. Y a pesar de ello, muchos y muchas siguen denunciando y exigiendo justicia así como el fin de la impunidad.

Un caso emblemático de represión política lo constituye el sindicato de electricistas, desaparecido por orden presidencial y que arrojo al desempleo y la desesperación a

miles de trabajadores, varios de ellos ahora enfermos ante la falta de seguridad social, algunos al límite de la desesperación han preferido terminar con su vida.

Ante las desapariciones forzadas, que día a día aumentan en todo el país, la respuesta de las instituciones ha sido de evasiones, corrupción e impunidad, varios de estos casos ya son de conocimiento de la justicia internacional, pero han pasado mucho años para lograrlo. Las irregularidades en las averiguaciones previas han generado impunidad e investigaciones carentes de veracidad.

En otros casos las evidencias no fueron tomadas en cuenta o se uso la tortura para incriminar inocentes, se ha inculpado a personas ajenas para justificar resultados de esta guerra contra el narcotráfico. Y el dolor no acaba, y sigue presente lastimando a familiar, a hijos e hijas, a la sociedad entera. Las instituciones se escudan en la burocracia, usan sus relaciones de poder e intereses para no llegar al fondo de lo que todos sabemos, de la red de complicidades que impiden el acceso a la justicia. En el caso de las instituciones de derechos humanos no solo se han desligitimado ante su falta de actuación, sino que han favorecido la impunidad.

La implicación del Ejército en muchos de estos casos se hace cada día más evidente, muchas personas están rompiendo el miedo a denunciar, porque en muchos de estos casos hay amenazas para garantizar el silencio. El Estado se resiste a investigar al Ejército.

Las poblaciones indígenas desplazadas por conflictos intercomunitarios, en defensa de sus recursos y de su autonomía siguen demandando justicia e investigaciones en casos de asesinatos, desapariciones, violaciones y presencia de paramilitares.

El panorama es terrible, sin embargo, encontramos también en la mesa testimonios que nos hablan de la fuerza de estas personas que han sobrevivido a la represión, al dolor y a la impunidad.

- Seguimos movilizándonos, denunciando y exigiendo justicia, pensamos que lo peor que uno puede hacer es quedarse callado, y esta Caravana es un ejemplo de ello.
- Nos estamos acompañando, estamos alzando la voz ante el no saber que hacer y la desesperación que enfrentamos día a día.
- Seguimos denunciando la actuación arbitraria de los cuerpos policíacos y los militares, que son usados para reprimir y desaparecer ciudadanos de este país.
- Estamos organizados para resistir, como expresos y expresas políticas, comunidades indígenas, organizaciones sociales, desde las cuales se han impulsado campañas de solidaridad y denuncia, así como diversos proyectos.
- Seguimos buscando formas jurídicas para encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país.
- Desde este rincón de México, decimos Ya basta! De esta güerra sin sentido que cada día cobra nuevas vidas.
- Hacemos votos para que esta Caravana cumpla a cabilidad con llevar nuestra palabra, como le fue encomendado en el ritual de Montealbán.

Mesa 4. Agravios a periodistas

Parte del documento que se leyó al principio en la mesa:

Los derechos de libre expresión se quedaron en México detenidos en el siglo XIX. Las batallas que diversos periodistas y activistas dieron para tener medios impresos propios hoy tienen que darse de nuevo para poder tener medios electrónicos. Las leyes de nuestro país están configuradas de tal modo que solamente grandes empresarios y el gobierno mismo puedan operar y detentar radios y canales de televisión. Oaxaca ha sido uno de los territorios que más radios comunitarias ha tenido y ´por lo tanto que mayor represión ha sufrido por intentar transmitir desde frecuencias propias de los pueblos y de la sociedad civil. Si la dictadura porfirista rompía las prensas y quemaba los locales de los diarios independientes o críticos hacia el gobierno, la Secretaría de Gobernación actual, haciendo pinza en muchos momentos con los gobiernos locales, persigue, reprime e ilegaliza a los impulsores de las radios, incauta sus equipos, los destruye o bloquea sus señales. Uno de los derechos básicos, el derecho a la información es así violentado drásticamente. Todos los niveles de gobierno confabulan para hacer inamovible esta injusticia. Así, no es casualidad que el conflicto social que tuvo lugar en Oaxaca durante el gobierno del déspota Ulises Ruiz, tuviese como uno de sus epicentros el control de los medios.

Documento síntesis:

En nuestra mesa examinamos la manera en que la violencia reinante se multiplica a través de los medios de comunicación convencionales. Denunciamos cómo muchos de ellos operan como instrumentos de opresión y destrucción de nuestras

culturas. Se han hecho cómplices de los gobiernos y las corporaciones, para silenciar las luchas populares y ser caja de resonancia del gobierno.

La lucha por la libertad de expresión ha cambiado en términos de la tecnología, pero no de la sustancia. Si la dictadura porfirista rompía las prensas y quemaba los locales de los diarios independientes o críticos hacia el gobierno, la Secretaría de Gobernación actual, haciendo pinza en muchos momentos con los gobiernos locales, persigue, reprime e ilegaliza a los impulsores de las radios, incauta sus equipos, los destruye o bloquea sus señales. Uno de los derechos básicos, el derecho a la información, es así violentado drásticamente por todos los niveles de gobierno. No es por ello casualidad que el conflicto social de 2006 haya tenido como uno de sus epicentros el control de los medios.

Denunciamos en nuestra mesa los agravios directos que han sufrido los periodistas. Han perdido la vida varios compañeros y compañeras y otros han sufrido persecuciones, secuestros y amenazas.

Desde que Ulises Ruiz tomó posesión tras su fraudulenta elección, se dedicó a perseguir y reprimir a cualesquier medio o periodista que fuese crítico con su gubernatura. Amenazas telefónicas o en la calle, daños a los vehículos de periodistas, robo a las casas y oficinas, eran la tónica común. En el verano del año 2005, mientras el gober represor disfrutaba cínicamente de la Guelaguetza al lado de Marta Sahagún de Fox, porros priístas intentaron tomar el periódico más grande de la oposición, el diario *Noticias*. Los periodistas y directivos del medio resistieron desde adentro la embestida y permanecieron secuestrados en el inmueble durante más de 20 días. Pero ya para ese momento muchos periodistas independientes sufrían amenazas, intentos de soborno, persecución. Había un clima generalizado de hostigamiento hacia el pensamiento crítico, se asfixiaban las garantías individuales, los defensores de derechos humanos eran también perseguidos, amedrentados y sus casas eran sospechosamente asaltadas en momentos en que su trabajo abordaba situaciones delicadas para el régimen autoritario.

Por su lado, los medios electrónicos más poderosos se dividían entre los que adulaban ciegamente al gobernador y los que azuzados por el gobierno federal de extracción panista, encontraron la forma de desprestigiar por igual al movimiento social oaxaqueño y a la izquierda que al gobierno de Ulises Ruiz, haciéndole el trabajo sucio al PAN ante las elecciones federales que se darían en el año 2006, y que conforme se acercaban, tuvieron un protagonismo inédito de las televisoras y las radios comerciales.

Muy diversos factores determinaron que el movimiento popular pusiese énfasis en recuperar espacios mediáticos, por lo que se realizaron tomas de radios comerciales y del sistema público de radio y televisión. Las radios comunitarias se multiplicaron, tanto en frecuencia abierta como en internet, dieron sustento a la información y enlace internos del movimiento, y permitieron difundir fuera de Oaxaca lo que pasaba.

Cabe recordar que horas antes del desalojo de los maestros que dio inicio al conflicto, fuerzas represoras penetraron en el local de Radio Plantón, la radio de la sección XXII del magisterio independiente. El asesinato del periodista estadounidense del portal independiente Indymedia, Brad Will, a manos de pistoleros paramilitares del gobierno, detonó la entrada de la Policía Federal Preventiva a petición de la embajada de Estados Unidos. En nuestra mesa denunciamos las irregularidades de la investigación

de este crimen y presentamos la exigencia de que la procuraduría estatal, que acaba de asumir el caso, proceda al fin con objetividad y sea posible consignar a los verdaderos responsables del crimen.

A partir de la invasión de fuerzas federales a Oaxaca fue constante el bloqueo de la señal de las radios independientes o tomadas, así como el hakeo de páginas electrónicas críticas u orgánicas a algún sector del levantamiento. De hecho, el día de la represión final, cuando se violaron absolutamente todas las garantías individuales del pueblo a manos de fuerzas militares vestidas de policías, ese 25 de noviembre se bloquearon hasta las señales de telefonía celular y se terminó por apagar cualesquier radio independiente. Ese día, incluso, hubo un bloqueo durante horas para acceder a la señal de internet en la capital de Oaxaca. Se practicaban ya en el estado los métodos que se han usado en varios de los países árabes por sus dictadores.

Por desgracia, el fin del conflicto no terminó la represión y violencia contra los medios y la libre expresión. Durante los siguientes años, varios periodistas de medios locales y de varios de los medios más importantes del país fueron torturados, secuestrados, baleados o asesinados en Oaxaca sin que las autoridades hayan castigado a los culpables intelectuales y materiales de estos crímenes. Ahí están las agresiones a Pedro Matías de la revista *Proceso* o el de Ixtli Martínez del programa radiofónico de Carmen Aristegui como ejemplos de lo que sucede en nuestro país y en Oaxaca. Pareciera que el gobierno de Ulises Ruiz castigó tras el conflicto a quienes dieron cobertura periodística a los hechos, pero las autoridades federales han cobijado ese actuar criminal.

Las violaciones a los derechos humanos de los periodistas han continuado en estos meses de nuevo gobierno. Se expusieron varios casos en nuestra mesa.

Destacamos también, en nuestra mesa, la alternativa que aquí se construye. Oaxaca es ya el estado con mayor número de radios comunitarias. Se exploran entre nosotros todas las formas de uso autónomo de la red de internet y se llevan a cabo innumerables iniciativas para hablar en libertad y enlazarnos con otros. Utilizamos profusamente muy diversas técnicas para ese fin.

Con la experiencia que hemos acumulado, exigimos ahora la ciudadanización efectiva del sistema estatal de radio y televisión. Deben establecerse barras de programación por sectores sociales, que puedan ser producidas por la propia sociedad civil. Estamos seguros de que lo haremos mucho mejor que el actual sistema, concentrado como siempre en la difusión de actividades del gobernador y sus funcionarios.

Oaxaca y el pueblo de México, los pueblos indígenas y las tribus urbanas, la sociedad civil de este país, merecen la consolidación de sus derechos a la libre expresión y a tener acceso a información veraz, creíble.

Sin medios y periodistas libres, no hay democracia. Exigimos el castigo a los culpables que desde el poder político y económico atacan a los periodistas, exigimos la legalización de las radios comunitarias y ciudadanas, exigimos canales de televisión del pueblo y no de los monopolios empresariales.

Mesa 5. Agresiones Económicas, Políticas y Culturales

LA OTRA VIOLENCIA

Abordamos en esta mesa un género de violencia tan evidente que resulta invisible. Es difícil imaginar una violencia mayor que la violencia que lleva a una persona a abandonar familia y comunidad, aunque eso pueda llevar a la destrucción de ambas.

Una quinta parte de los mexicanos vive actualmente fuera del territorio nacional. Hay más oaxaqueños fuera de Oaxaca que en Oaxaca. No hay migración comparable en el mundo. No es consecuencia de desastres naturales ni de la búsqueda de una vida mejor. La inmensa mayoría de los que se van lo hacen porque no les queda otro remedio – porque en sus propios lugares y culturas no pueden encontrar oportunidades dignas de trabajo e ingreso. Lo hacen incluso por desesperación, ante amenaza clara de extinción.

La violencia que es la causa principal de esta migración forzada tiene nombre y apellidos: nace de una política insensata y criminal que lleva ya tres décadas y se llama neoliberalismo. Como esa política enfrenta una resistencia colectiva cada vez más amplia, firme y mejor organizada, el gobierno se ha estado viendo obligado a usar la fuerza para imponerse. No es desmesura, como se ha dicho, sostener que la guerra de Calderón, que empezó en Oaxaca aún antes de convertirse en presidente ilegítimo, es en realidad una guerra contra el pueblo que usa el pretexto del narcotráfico para criminalizar a los movimientos sociales.

No estamos aquí para una sesión de análisis o una reflexión sobre esas políticas. A la manera del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, estamos aquí para dar visibilidad a las víctimas de esa política y para mostrar cómo la queremos detener. En realidad, todos los oaxaqueños se encuentran entre las víctimas. Como no pueden estar aquí todos los afectados, hemos elegidos algunos casos emblemáticos, mientras en otras mesas hablan los pueblos indios en resistencia, las víctimas de la represión y las mujeres.

Oaxaca tiene aún una amplia población campesina. El gobierno quiere acabar con ella. En 1991, Carlos Hank declaró: “Mi obligación como Secretario de Agricultura es sacar del campo a diez millones de campesinos”. “¿Y qué van a hacer con ellos?”, preguntó un periodista. “Esa no es mi área de trabajo”, respondió Hank. No fue trabajo de nadie. El candidato Fox señaló, ante una pregunta semejante: “Pueden irse de jardineros a Texas o poner su changarro”. Su Secretario de Agricultura elevó la meta: buscó expulsar a 20 millones de campesinos. Calderón se ha mantenido fiel al empeño.

La catastrófica reforma del artículo 27 constitucional, para lanzar la tierra al mercado, se puso al servicio de esta meta criminal. Aunque esa política ha causado inmensos daños, ha fracasado en su propósito principal. En México existen hoy más campesinos que nunca y la resistencia se vuelve cada vez más firme.

En Oaxaca, la principal expresión de la política oficial y la principal forma de resistencia se relaciona con el maíz. Aquí nació, hace cerca de diez mil años. Oaxaca es el centro mundial de origen del maíz y aquí se dio el diálogo entre el hombre y la planta

que hizo posible llevarlo a todo el mundo y que la gente de estos lugares fuera gente de maíz.

Campesinos de Oaxaca y de otros estados convirtieron la migración forzada en estrategia para expandir la producción campesina de maíz, a pesar del ataque oficial. Una parte de las remesas se emplea para sembrar la milpa. De Oaxaca salió, hace siete años, la campaña "Sin maíz no hay país", que hoy sigue su rumbo autónomo en muchas regiones. Aquí se ha librado una lucha constante contra los transgénicos, cuya contaminación apareció entre nosotros por culpa del gobierno, que los trajo.

Vamos a hablar de la violencia del Estado y las corporaciones contra el maíz y contra quienes lo siguen cultivando y vamos a hablar de lo que hacemos para resistir.

Vamos a hablar también del agua. El agua ha tenido y tiene para los oaxaqueños un carácter sagrado. Muy diversas tradiciones, en nuestras culturas, aseguran el libre acceso de todos a este bien común. Hoy se le ha convertido en mercancía, se ha cometido todo género de abusos con ella y se han desatado en todas partes guerras por agua. En el mundo, más de tres y medio millones de personas mueren al año por haber ingerido agua contaminada; un niño muere cada tres segundos por ese motivo. En Oaxaca se reproduce ese marco. Imaginemos la violencia encerrada en el hecho de que nuestros hijos mueran por el agua que les damos a tomar. Y eso es lo que está pasando aquí. En la mesa de pueblos indios los compañeros de Calpulalpam están denunciando cómo una minera, respaldada por el gobierno, contaminó su agua de arsénico y de plomo, muy por encima de los niveles aceptables. Y es el agua que están teniendo que tomar. No tienen otra.

Vamos a hablar de la violencia que se practica en Oaxaca en relación con el agua, cómo se nos priva de acceso a ella, cómo nos enfermamos y morimos por problemas en la cantidad o la calidad del agua. Por qué nos vemos obligados a decir a todos los visitantes que llegan a esta ciudad que no se atrevan a beber el agua de la llave y por qué la mitad del año padecemos terrible escasez y nos vemos obligados a comprarla muy cara, y en la otra padecemos inundaciones.

Vamos a hablar también de lo que estamos haciendo, cómo fue que se inventó aquí el Foro Oaxaqueño del Agua y cómo desde la sociedad civil se han identificado las soluciones y se empiezan a poner en práctica, contra viento y marea.

Hablaremos igualmente de la manera en que toda la violencia se multiplica a través de los medios convencionales. Cómo es que muchos de ellos se han convertido en instrumento de opresión y destrucción de nuestras culturas, de nuestro propio ser. Cómo se han hecho cómplices de los gobiernos y las corporaciones, para silenciar las luchas populares, la resistencia de la gente, y hacer propaganda de las políticas insensatas y criminales del gobierno. Vamos a hablar de los agravios directos que han sufrido los periodistas, por los que el oficio se ha convertido en Oaxaca en uno de los más peligrosos. Dos compañeras perdieron la vida. Otros compañeros han sufrido persecuciones, secuestros y amenazas.

Vamos a destacar la alternativa que aquí se construye. Oaxaca es ya el estado con mayor número de radios comunitarias. Se exploran aquí todas las formas de uso

autónomo de la red de internet y se llevan a cabo innumerables iniciativas para hablar en libertad y enlazarnos con otros.

Están con nosotros representantes de quienes han sido clasificados como personas con discapacidad. No les gusta mucho ese término. Sostienen con razón que todos tenemos capacidades y limitaciones, que todos padecemos deficiencias específicas y talentos especiales. Van a exponer aquí por qué se consideran víctimas de violencia, por parte de la sociedad y el gobierno, que los tratan en forma discriminatoria y humillante, descalificándolos injustamente.

El Movimiento ha estado señalando que la emergencia nacional que actualmente enfrentamos, causada por la guerra de Calderón, ha desgarrado el tejido social. Tenemos que empeñarnos en regenerarlo, porque en él se encuentra la mejor esperanza de detener la violencia.

Sin embargo, otra guerra invisible sigue destrozando el tejido social. Es la guerra de las inversiones que el Estado promueve, inversiones en actividades productivas y comerciales que nos destruyen con enorme violencia. Los pueblos indios están planteando cómo los afectan las mineras, los megaproyectos y otras violencias. Aquí vamos a hablar de la agresión comercial.

El caso emblemático para nosotros es el de Chedraui. De noche, como delincuentes, el 18 de julio de 2008 llegaron a derribar cientos de árboles, algunos de más de cien años, en un bello bosque urbano que queríamos convertir en parque público y centro cultural. Luchamos por dos años, utilizando todos los procedimientos democráticos, para combatir decisiones que violaron leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. Fue inútil. A pesar de promesas y compromisos del nuevo presidente municipal y que demostramos técnicamente la insensatez y riesgos de la obra, se ha construido un adefesio enorme.

Presumen los de Chedraui y sus defensores del gobierno que crearán empleos. Habrá algunas ocupaciones miserables, mal pagadas o sin pago. Los trabajadores de la obra denunciaron ya ante el gobernador que la empresa no les paga. Es su costumbre. Chedraui ocupa el segundo lugar por número de denuncias ante la Secretaría del Trabajo; el primero es de Wal Mart. Y por cada uno de esos empleos se habrán destruido diez – de todos los productores y comerciantes que serán sacados del mercado por la fuerza de la empresa. De todo eso hablaremos en esta mesa.

Queremos hacer evidente, ante todo, que se ha creado un lodo social y político que es ya insoportable. El lodo, como los humedales y las orillas de ríos y lagos, es una sustancia peculiar, en que no es posible distinguir las fronteras entre el mundo acuático y el mundo terrestre. Pertenece a los dos. Lo mismo está ocurriendo ahora. Vivimos en un lodo social, en que ya no es posible distinguir las fronteras entre lo legal y lo ilegal, el mundo de las instituciones y el mundo del crimen. Se confunden continuamente. Político, policía, criminal, se van volviendo términos intercambiables.

En Oaxaca vivimos en ese lodo desde hace más de una década. Los políticos, los gobernantes, se han convertido en modelo de criminales. Sus prácticas y su impunidad, la medida en que pueden cometer los peores crímenes sin temor al castigo, confiados,

incluso, en que se les premiará con promociones, se han convertido en modelo para delincuentes comunes y han creado un clima de violencia que es ya insoportable.

Padecemos la violencia común. Hay robos, asaltos, secuestros, asesinatos. Competimos por el primer lugar en el país en feminicidios. Aumenta la violencia doméstica. Se multiplican los conflictos entre comunidades. Pero aquí no hay lugar a equivocarse. La violencia viene principalmente del gobierno. Tras muchos años de represiones diversas, el 25 de noviembre de 2006 las fuerzas federales actuaron salvajemente contra la población civil desarmada y dejaron docenas de muertos y desaparecidos y cientos de heridos y encarcelados injustamente. La operación formaba parte de los arreglos oscuros que hicieron posible a Felipe Calderón llegar adonde está. Por eso, seguramente, se garantizó impunidad a los culpables.

La violencia no ha cesado. Es cierto que el año pasado logramos deshacernos de la mafia política de Ulises Ruiz. Es cierto también que todos podemos apreciar la diferencia: corrimos a un tirano psicopático y sanguinario e impedimos que llegara en su lugar su guardaespaldas. Pero no logramos aún que haya aquí una auténtica transición democrática. La alternancia no es suficiente. Siguen haciendo de las suyas las viejas mafias políticas, enquistadas en 80 años de dominación priísta. Los nuevos funcionarios no logran cumplir sus funciones, tanto por los enredos que les dejaron y les siguen provocando como por sus propias incompetencias y limitaciones.

Se habla en Oaxaca continuamente de un proceso de cambio. Queremos decir, como los indígenas de Bolivia y los pueblos de Oaxaca, que no queremos ese proceso de cambio. Queremos un cambio de proceso. Queremos que los gobernantes entiendan que en la sociedad civil, en las comunidades, en los barrios, está la clave para salir de la situación insoportable en que nos encontramos. Que sólo con nosotros, con los ciudadanos, podrá gobernarse Oaxaca. Que en ellos está el secreto de toda auténtica gobernabilidad.

Sabemos bien que el gobierno puede desgarrar el tejido social, destruirlo, deshacernos. Lo ha estado haciendo. Pero no puede regenerarlo, aunque quisiera. Por eso necesitamos atarle las manos. En Oaxaca no queremos al ejército, en ninguna de las funciones que se le han estado dando. No queremos sus retenes tan ilegales como inútiles. No queremos que su comandante les siga ordenando que los soldados hagan lo que no deben hacer. La guerra de Calderón debe terminar.

En Oaxaca, además, así sea con enormes dificultades, avanzamos paso a paso, a contracorriente, en la tarea de regenerarnos desde abajo. Aquí también puede demostrarse que sobran propuestas y caminos alternativos. Que el gobierno no puede seguir argumentando que debe seguir por donde va porque no hay de otra. Existen las opciones. Las hemos estado poniendo a prueba. Son sustituto eficaz de la violencia actual.

Porque estamos realmente hasta la madre

Porque no soportamos ya todas las guerras que se libran contra nosotros

Porque vivimos en crisis permanente, agobiados de dificultades

Porque ya no le tenemos miedo al miedo

Decimos que no a la guerra de Calderón, y con él al régimen político y económico que encarna.

Y decimos también que sabremos detenerlo y empezar la tarea de regeneración.

Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia en Oaxaca,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lunes 12 de septiembre de 2011.